

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

C/ GARCIA GUTIERREZ, 1

Tfno: 917096808/917096474

Fax:

NIG: 28079 27 2 2022 0001528

GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000050 /2022

AUTO

En Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintidós.

HECHOS

PRIMERO. - Con fecha 20/06/2022 tuvo entrada en este Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el querellado Fernando Presencia Crespo, por un presunto de injurias y/o calumnias del art. 205 y ss. Del Código Penal, así como un delito contra las altas instituciones del Estado previsto en el art. 504 del Código Penal.

SEGUNDO. - En el escrito de querella se interesa la práctica de determinadas diligencias de investigación.

Igualmente se solicita la adopción, como medida cautelar, del cierre de la página web <http://www.acodap.com> y la retirada del vídeo referido en el escrito de denuncia difundido a través de la página YouTube, al amparo de lo establecido en el art. 13 de la LECRIM en relación con el art. 8.1 a) de la Ley 34/2022.

Dada cuenta, quedaron los autos sobre la mesa de S.Sª.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Admisión de la denuncia e incoación del presente procedimiento de Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado.

Tal y como se refiere en el escrito de denuncia y la documentación adjunta, la Fiscalía de la Audiencia Nacional



incoó las Diligencias de Investigación Núm. 43/2022, tras haber recibido de la Fiscalía General del Estado (Unidad de Criminalidad Informática) las Diligencias de Investigación Penal núm. 4/2022, incoadas en fecha 14 de junio de 2022 (inicialmente núm. 374/22).

Estas últimas diligencias (núm. 347/2022) se iniciaron a su vez, tras la comparecencia efectuada el día 6/06/2022 en la Fiscalía General del Estado, por el Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo Don **Julián Sánchez Melgar** en la que solicitaba la intervención del Ministerio Fiscal al amparo del art. 215 del Código Penal a causa de la publicación a través de una página web de una información relativa al compareciente que pudiera considerarse de carácter injurioso o calumnioso.

Concretamente el Sr. Melgar hacía referencia a la publicación en el digital El Diestro y en la página web de la Asociación ACODAP de determinadas informaciones que le imputan la posesión en un paraíso fiscal de cantidades importantes de dinero supuestamente obtenidas mediante sobornos.

También se remite en la documentación anexa a la denuncia la comunicación que se remitió por quien se identifica como Marcos Martínez a la Fiscalía General del Estado en la que se informa de la publicitación a través de la página web de la misma Asociación ACODAP (<http://www.acodap.com>) de informaciones relativas a una supuesta actividad de blanqueo de capitales por parte de la Excmo. Sra. Fiscal General del de quien se afirma posee cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Posteriormente, el 14/06/2022 los Excmos/as. Sres/as. Magistrados/as del Tribunal Supremo doña **Carmen Lamela Díaz** y don **Vicente Magro Servet** comparecieron ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado presentando denuncia por hechos de similar naturaleza a los relatados por el Excmo. Sr. Don Julián Sánchez Melgar. Se aporta a la denuncia del Fiscal el escrito presentado por los anteriores.

Igualmente se remitieron a la Fiscalía de Criminalidad Informática las comparecencias efectuadas ante la Fiscalía General del Estado por hechos semejantes por parte de los Excmos/as. Sres/as. Magistrados del Tribunal Supremo don **Pablo Llarena Conde** y don **Angel Luis Hurtado Adrián**, así como el Decreto dictado en las Diligencias de Investigación 5/22 de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que se daba cuenta de la comparecencia efectuada ante dicho organismo por los Excmos/as. Sres y Sras. Magistrados del Tribunal Supremo doña **Susana Polo García** y don **Andrés Martínez Arrieta** en referencia igualmente, a los contenidos difundidos a través del programa Estado de Alarma en la dirección <https://youtube.be/dkNexxQbKd0>, que también queda unido a las actuaciones.

Del análisis de la documentación presentada, así como del informe elaborado por la Guardia Civil, escrito de denuncia destaca los siguientes extremos:

La difusión por el periódico digital El Diestro en la página <http://eldiestro.es>, el pasado 6 de junio, de una publicación relativa al Excmo. Sr. Don **Julián Sánchez Melgar** en la que se le atribuye la posesión de un millón y medio de euros en un paraíso fiscal presuntamente procedentes de sobornos. Igualmente se atribuye en la publicación al Excmo. Sr. Sánchez Melgar el carácter de pieza fundamental en la trama delictiva que anida en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo.

En la citada publicación figura un enlace que da acceso a una supuesta denuncia presentada ante la AEAT, cuyo contenido se adjunta como Anexo núm. 1, en la que se imputan al denunciante delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales.

En el dominio <http://eldiestro.es> figura como administrador quien se identifica como **Angel Campos Rufián**, domiciliado en Córdoba y en cuyo perfil de Instagram se presenta como Editor del medio de comunicación digital El Diestro.

Es examen de la página web <http://www.acodap.com> permite constatar la publicación de varios artículos referentes a la existencia de diversas cuentas en paraísos fiscales a nombre respectivamente de los Excmos/as. Sres y Sras doña **Carmen Lamela Díaz**, don **Vicente Magro Servet**, don **Pablo Llaarena Conde** y don **Julián Sánchez Melgar** en las que supuestamente se encuentran depositadas determinadas cantidades de dinero procedentes de sobornos.

En cada uno de los supuestos la publicación se acompaña de un enlace que permite acceder a lo que se dicen son -sin acreditación alguna- documentos justificativos de los correspondientes extractos bancarios de las indicadas cuentas.

En todos los casos se hace referencia igualmente a la existencia de una trama delictiva en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo. en la que los citados Magistrados constituyen pieza esencial.

En la página web a la que nos venimos refiriendo (<http://www.acodap.com>) y con fecha 30/05/2022 se da publicidad igualmente a la denuncia presentada, el 18/05/2022, por Fernando Presencia Crespo ante la Comisaría de Policía de Talavera de la Reina (Toledo) contra el Excmo. Sr. Don **Carlos Lesmes Serrano**, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Excmo. Sr. Don **Pablo Lucas Murillo de la Cueva**, Magistrado del Tribunal Supremo asignado al CNI, así como contra otras personalidades imputando igualmente a ambos la comisión de fraude fiscal, evasión y

blanqueo de capitales por la posesión en paraísos fiscales de importantes cantidades de dinero a su nombre.

En la publicación figura un link que permite acceder a la denuncia supuestamente presentada ante la AEAT contra los anteriores.

La página web <http://www.acodap.com>. esta registrada a nombre de la llamada "Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública" (ACODAP) y la -IP del servidor que la aloja pertenece a la empresa UNELINK TELECOM SA. La citada Asociación está fundada y presidida por Fernando Presencia.

Además del contenido de la página web referida, debemos mencionar el vídeo difundido la dirección <https://youtube.be/dkNexxQbKd0>.

El vídeo consistiría en una entrevista realizada a Fernando Presencia, quien en el minuto 29 imputa a diversos Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la aceptación de sobornos supuestamente en razón a actuaciones jurisdiccionales y la posesión de cantidades económicas importantes en diversos paraísos fiscales. Concretamente las imputaciones se refieren a los Excmos/as. Sres/as. doña **Susana Polo Garcia**, doña **Carmen Lamela Díaz**, don **Andrés Martínez Arrieta**, don **Andrés Palomo del Arco**, don **Vicente Magro Servet**, don **Julián Sánchez Melgar**, don **Miguel Colmenero Menéndez de Luarca**, don **Pablo Llarena Conde** y don **Angel Luis Hurtado Adrián** también como supuestos integrantes de la trama delictiva constituida en el seno del Tribunal Supremo.

En citado video no está actualmente disponible al haber sido retirado. No obstante, ha sido posible la recuperación de una copia del mismo en la web.archive.org.

En todas las publicaciones relacionadas con los apartados anteriores, incluido el video difundido a través de youtube, se solicita a los usuarios de internet efectúen donaciones (crowdfunding) en favor de la Asociación ACODAP y o de su presidente Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de Juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción facilitando a dicho fin el IBAN de una cuenta corriente así como direcciones de PAYPAL y BIZUM, en las que se pueden efectuar los correspondientes depósitos. No constan, por el momento, las cantidades percibidas por este concepto ni el destino dado a las mismas por los promotores de la campaña.

Por todo ello, el Fiscal interpone el escrito de denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional al amparo del art. 65 de la LOPJ entendiendo que los Juzgados centrales de Instrucción serían competentes al tratarse de un delito contra el titular de la Corona, su Consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de Gobierno; así mismo en



art. 65 LOPJ se dice que este órgano central de la Administración de Justicia, en todo caso, también será competente para conocer de los delitos conexos.

La denuncia la dirige la Fiscalía de la Audiencia nacional contra Fernando Presencia Crespo, presidente o dirigente de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) así como contra todas aquellas personas que puedan haber participado en la comisión de los hechos descritos en la presente denuncia y que se puedan ir determinando a lo largo de la instrucción de la causa.

La denuncia se interpone, desde la provisionalidad de este momento procesal y sin perjuicio de ulterior calificación, por presunto delito de injurias y/o calumnias del art. 205 y ss. Del Código Penal, así como un delito contra las altas instituciones del Estado previsto en el art. 504 del Código Penal, no pudiendo descartar que se sumen otras infracciones de carácter patrimonial.

De conformidad con los art. 774 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal procede la incoación de Diligencias Previas del procedimiento Abreviado, al apreciarse la existencia de unos hechos que, desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, revisten carácter de delito, habiendo tenido conocimiento de estos hechos a través del escrito de denuncia presentado por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO. - En el escrito de denuncia el Ministerio Público solicita la adopción, como medida cautelar, del cierre de la página web <http://www.acodap.com> y la retirada del vídeo referido anteriormente difundido a través de la página YouTube, al amparo de lo establecido en el art. 13 de la LECRIM en relación con el art. 8.1 a) de la Ley 34/2022.

El art. 13 de la Lecrim dispone que *"Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley."*

El art. 8.1 de la Ley 34/2022, de 11 de julio, señala; *"En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su*

prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:

- a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
- b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
- c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
- d) La protección de la juventud y de la infancia.
- e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en los que la Constitución y las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información."

Por lo que se refiere a la retirada del vídeo aludido, que al parecer se encontraba alojado en la web "Youtube", el mismo no se encuentra disponible, como se ha podido comprobar por este mismo instructor.

En cuanto a la adopción de la medida cautelar interesada por el Fiscal consistente en el cierre de la página web <http://www.acodap.com> debemos poner de relieve, en primer lugar, los intereses en conflicto; de un lado el derecho a la libertad de expresión de la asociación ACODAP, de otro la salvaguarda del orden público, en el marco de una investigación penal, cuando existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web.

Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos, "el artículo 10 del CEDH garantiza la libertad de expresión y de información a toda persona y se refiere no solo al contenido de la información, sino también a los medios a través de los que se difunde, considerándose que cualquier restricción a estos medios afecta al derecho a recibir y comunicar información. Como dicho Tribunal ha declarado, Internet es actualmente uno de los principales medios para el ejercicio por los individuos de su derecho a la libertad de expresión y de información. Los sitios de Internet y en particular las plataformas de intercambio de contenido en línea contribuyen enormemente, merced a su accesibilidad y a su capacidad para conservar y difundir grandes cantidades de datos, a mejorar el acceso del público a los asuntos de actualidad y, de manera general, a facilitar la comunicación de la información y la posibilidad de los individuos de expresarse en Internet constituye una herramienta sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión (STEDH, sentencias de 1 de diciembre de 2015, Cengiz y otros c. Turquía, STEDH de 23 de junio de 2020, Vladimir Kharitonov c. Rusia).

Esta conexión con la libertad de expresión, que nuestra constitución regula en el art. 20 CE, permite configurar claramente los límites en el ejercicio de esta libertad, que no es absoluta. Así, por ejemplo, la STC 93/2021, 10/05/2021, afirma que la libertad de expresión tiene sus límites. Las redes sociales han creado un nuevo marco de relaciones interpersonales, caracterizado por la facilidad de su empleo y la accesibilidad.

El ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, tampoco puede menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona. A ello deberíamos añadir la comisión injurias y/o calumnias, que son las formas típicas en que se subsume el insulto o la blasfemia en su forma más basta.

Atendiendo a los criterios de valoración recogidos en la STC 35/2020, de 25/02/2020, podemos comprobar que existe un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión que, desde la provisionalidad de este momento procesal justificaría la adopción de las medidas interesadas;

De un lado nos encontramos con una restricción del derecho a la libertad del derecho prevista legalmente, ya que observamos un atentado contra uno de los principios previsto en el art. 8.1 de la Ley 34/2002, que justifica una interrupción en la prestación del servicio web que facilita la vulneración flagrante del principio.

La medida atiende a una finalidad legítima, cual es la de acabar con una situación antijurídica, que se materializa con la publicación de los contenidos que se consideran contrarios al orden público.

La medida resulta necesaria para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecia otra opción menos gravosa e igualmente efectiva.

Finalmente, la medida se considera proporcionada, toda vez que el perjuicio que se causa a la libertad de expresión no es mayor que la necesidad de restablecer el orden público que se constata en el presente caso, al observarse que la página web de la Asociación es utilizada de forma reiterada para divulgar informaciones que, desde la provisionalidad de este momento procesal, se constata que presentan claros rasgos delictivos y suponen una injerencia ilegítima en el honor de los perjudicados.

Por todo ello, debe accederse a la adopción de la medida cautelar interesada, debiendo librar a través de la Dirección Adjunta Operativa Jefatura de Policía Judicial UCO - Departamento contra Cibercrimen, de la Guardia civil, mandamiento dirigido a la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública" (ACODAP) y a la empresa UNELINK TELECOM SA, para que procedan al cese cautelar de la página web <http://www.acodap.com>, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.

TERCERO. - El art. 299 de la LECRim establece que corresponde a la fase de sumario (o Diligencias Previas en el Procedimiento Abreviado) realizar todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las de las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

En el presente caso se acuerda proceder a la práctica de las diligencias que se refieren en la parte dispositiva de esta resolución.

Por todo lo anterior,

DISPONGO:

INCOAR las DILIGENCIAS PREVIAS, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal, que se registrarán con el número DPA 50/2022.

La adopción de la medida cautelar interesada, debiendo librar a través de la Dirección Adjunta Operativa Jefatura de Policía Judicial UCO - Departamento contra Cibercrimen, de la Guardia civil, mandamiento dirigido a la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública" (ACODAP) y a la



empresa UNELINK TELECOM SA, para que procedan al cese cautelar de la página web <http://www.acodap.com>, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.

Se acuerda practicar las siguientes diligencias;

Oficiar a la Guardia Civil para que investiguen los hechos objeto de la presente denuncia, identifiquen todos los presuntos perjudicados, e informen sobre las aportaciones que se realizan a la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública y su destino.

Citar a declarar como investigado a Fernando Presencia Crespo, asistido de abogado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 118 LEcrim, recabando su hoja de antecedentes penales.

Tome declaración y ofrecimiento de acciones como perjudicados a los Excmos Srs. y Sras. Don Carlos Lesmes Serrano, Don Pablo Lucas Murillo de la Cueva Susana; Doña Susana Polo Garcia, doña Carmen Lamela Díaz, don Andrés Martínez Arrieta, don Andrés Palomo del Arco, don Vicente Magro Servet, don Julián Sánchez Melgar, don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, don Pablo Llarena Conde y don Ángel Luis Hurtado Adrián.

La incorporación de toda la documentación que se remite con la denuncia del Fiscal.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas advirtiéndole que contra la misma puede interponer RECURSO DE REFORMA y subsidiario de APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación o RECURSO DE APELACIÓN dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma, el Don Joaquín Elías Gadea Francés, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción Seis de la Audiencia Nacional. DOY FE.